



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

1

México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil once.- Encontrándose debidamente integrada esta Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los CC. Magistrados Licenciados **ALBERTO MACHUCA AGUIRRE**, en su carácter de Presidente e Instructor en el presente juicio, **LUCELIA MARISELA VILLANUEVA OLVERA** y **MARÍA BÁRBARA TEMPLOS VÁZQUEZ**, ante la presencia de la C. Secretaria de Acuerdos quien autoriza con su firma en términos de la fracción II del artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **Lic. ORALIA VÁZQUEZ CORONEL**, con fundamento en los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a resolver el recurso de reclamación interpuesto en el presente juicio en los siguientes términos:

RESULTANDO

1º.- Por escrito presentado ante este Órgano Jurisdiccional el 11 de enero de 2011, compareció el **C. JUAN MANUEL ALVAREZ GONZÁLEZ**, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, (personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento de fecha 16 de enero de 2009, expedido por el C. Procurador de la República), a demandar la nulidad la resolución administrativa de fecha 18 de agosto del 2010, dictada en el expediente administrativo 1637/10, por la cual, los Comisionados del Instituto Federal de

Acceso a la Información y Protección de Datos, resolvieron el recurso de revisión interpuesto por ***** *****, revocando la respuesta de la Procuraduría General de la República a la solicitud de acceso a la información registrada con el número de folio 0001700031710.

2º.- Mediante auto de 13 de enero de 2011, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de nulidad intentada por la Procuraduría General de la República.

3º.- Mediante acuerdo de 14 de febrero de 2011, se tuvo por recibido el oficio ingresado ante este Órgano Jurisdiccional el día 20 de enero de 2011, por el cual el Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, exhibió copia certificada de la resolución de 18 de agosto de 2010, emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos relativa al expediente 1637/10, así como su constancia de notificación, y se le ordenó a la oficiante estarse a lo acordado en el auto de 13 de enero de 2011.

4º.- Inconforme con el acuerdo de 13 de enero de 2011, la actora interpuso recurso de reclamación en su contra, mediante escrito presentado ante este Órgano Jurisdiccional el 21 de febrero de 2011.

5º.- Mediante auto de fecha 6 de junio de 2011, se admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, ordenándose dar vista a su contraparte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, quien así lo hizo mediante escrito presentado ante este Órgano Jurisdiccional el 22 de junio de 2011.



SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

3

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Esta Sala es competente para emitir la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 14, fracción XVI, 31, 32, 33, 34 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 21 fracción XVII y 22 fracción XVII del Reglamento Interior de este Tribunal.

SEGUNDO.- El recurso de reclamación reúne los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en tanto que se interpuso oportunamente y en contra del auto por el que se desechó por improcedente la demanda de nulidad, el cual se notificó a la actora el día 31 de enero de 2011, notificación que conforme al artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, surtió sus efectos el día hábil siguiente, o sea el 1º de febrero del mismo año, por lo que el término de 15 días corrió del 2 al 23 de febrero de 2011, sin contar los días 5, 6, 7, 12, 13, 19 y 20 del mismo mes y año, por ser sábados y domingos e inhábiles, respectivamente; luego entonces, si el recurso de reclamación se presentó ante este Órgano Jurisdiccional el 21 de febrero de 2011, resulta manifiesta su oportunidad, pues se presentó dentro del término a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

TERCERO.- En el escrito de mérito la reclamante expresa en síntesis lo siguiente:

- Que es ilegal el acuerdo impugnado pues se omite considerar que existe normatividad que regula la competencia y facultades del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- Que el Magistrado Instructor debió acatar lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como lo establecido en la fracción XV, y último párrafo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que estable que el juicio de nulidad es procedente, no sólo para los particulares, sino también para las autoridades, cuando se controveja una resolución administrativa favorable a un particular por estimarse contraria a la Ley.
- Que la Procuraduría General de la República sí tiene acción y derecho para comparecer a demandar la nulidad de la resolución controvertida, emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues la misma favorece a un particular, al determinar que se elabore una versión pública de la información solicitada; por lo que queda demostrado que se surte la hipótesis normativa prevista en el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 14, fracción XV y último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues a través de la demanda de nulidad la Procuraduría General de la República, controveja una resolución administrativa que resultó favorable a un particular; en ese orden de ideas es incuestionable que es procedente el juicio contencioso administrativo y que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de dicho juicio.
- Que como hecho notorio se hacen valer las determinaciones emitidas por la Décima Sala Regional Metropolitana, a través de las cuales admitieron a trámite diversos juicios de nulidad promovidos por autoridades administrativas en contra de determinaciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
- Que es clara la violación flagrante a los artículos 2º, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14, fracción XV y último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de



Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en la especie se establece dentro de la normatividad organizacional de este Tribunal, que el mismo será competente para conocer y resolver de los juicios que se promuevan por autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular cuando dicha determinación se estime contraria a la ley.

- Que es inexacta la aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues el hecho de que el citado artículo puntualice que en el sistema de la ley que lo regula no existe medio legal o mecanismo jurídico para que las autoridades pueda impugnar las resoluciones que emite, ello no significa que las dependencias o entidades de la administración pública federal no tengan acción ante otras instancias para contradecirlas.
- Que es procedente la admisión de la demanda, pues si bien es cierto que el acto impugnado es una resolución definitiva emanada de un procedimiento administrativo regulado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, cuya legislación no prevé ningún otro medio de impugnación, también lo es que ello no implica que no pueda controvertirse en otra instancia y con fundamento en otra legislación como lo es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, creada por el Legislador precisamente para estudiar la validez de los actos administrativos de autoridad mediante juicio de nulidad.
- Que resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que de conformidad con el artículo 1 del Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio; en consecuencia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas que resulten de un procedimiento, una instancia o un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Que si la resolución impugnada versa sobre una instancia dictada por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por el cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto ante dicho Instituto, es evidente que se trata de una resolución administrativa que al ser

definitiva, de conformidad con los artículos 1º y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria, puede ser combatida a través de la presente instancia.

- Que se debe de destacar que la resolución que se impugna favorece a un particular, que fue dictada por un Órgano de la Administración Pública Federal con atribuciones para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos, que dicha autoridad no tiene subordinación a autoridad alguna y que cuenta con plena independencia para adoptar sus decisiones.
- Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resulta competente para conocer de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo previsto por los artículos 1 y 14 fracción XI de su Ley Orgánica, en relación con el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por tratarse de recurso de revisión en el que se impugna una resolución dictada por una autoridad administrativa, que pone fin a una instancia de carácter definitivo y favorable a un particular en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativa.
- Que si bien es cierto que la Procuraduría General de la República no se encuentra relacionada de forma expresa dentro de las dependencias que conforman a la administración pública federal centralizada y paraestatal, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, se puede concluir que ello no es obstáculo para ser considerada dentro de la Administración Pública Federal, facultada en consecuencia, para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular que es contraria a la ley.
- Que la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, misma que es materia de impugnación, fue substanciada conforme a lo previsto por el artículo 51 de su Ley Orgánica, en lugar del recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que fue dictada por una autoridad administrativa poniendo fin a una instancia.
- Que en el proveído impugnado se dejaron de aplicar los preceptos aplicables al caso, pues en la legislación que lo regula se establece la obligación de conocer de aquellas resoluciones administrativas que haya resultado favorables a un particular.
- Que el Magistrado Instructor no precisa los motivos o razones por las cuales dejó de aplicar al caso en que nos ocupa los preceptos invocados.

Por su parte la autoridad demandada, al contestar el recurso de reclamación, expresó en síntesis lo siguiente:



- Que los agravios hechos valer por parte actora son a toda luces improcedentes, ya que pretende hacer valer el juicio contencioso administrativa federal, en contra de una resolución dictada por dicho Instituto, siendo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer del presente asunto.
- Que el juicio de nulidad que pretende hacer valer la Procuraduría General de la República, en contra de la resolución dictada por dicho Instituto, contraviene lo preceptuado en la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego lo preceptuado en el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ordena que las resoluciones de ese Instituto serán definitivas y por ende inimpugnables para las dependencias y entidades y en el caso concreto para la Procuraduría General de la República.
- Que tal y como lo expresa la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tribunales Contenciosos Administrativos, únicamente pueden dirimir controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, y que los conflictos entre particulares y los órganos de la administración pública federal se circunscriben a los supuestos hipotéticos narrados en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- Que en el caso que nos ocupa y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 3, 49 y 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, son sujetos obligados a su observancia.
- Que en ninguno de los supuestos hipotéticos expresados por el numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se contempla la posibilidad de que dicho Tribunal sea competente para dirimir controversias entre dos entes del Gobierno Federal, aunado a que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no otorga competencia a este Tribunal para conocer de la impugnación de la resolución del recurso previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino únicamente de aquellas

resoluciones dictadas en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

- Que es de destacar lo previsto en el artículo 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el sentido de que el recurso previsto en los artículos 49 y 50 de la citada ley procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se concluye que en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se excluye la vía jurisdiccional prevista en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Que el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, son definitivas para las dependencias y entidades y que sólo los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual implica que la Procuraduría General de la República esta imposibilitada para impugnar las resoluciones emitidas por dicho Instituto, ya que la intención del legislador fue el privilegiar el orden público y el fácil acceso a la información a los gobernados, desproveyendo a las autoridades de todo recurso o medio legal que entorpeciera el acceso a la información a favor de los gobernados.
- Que la parte actora pretende fundar en forma por demás ilegal la procedencia del juicio de nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual prevé la posibilidad de que mediante un procedimiento contencioso administrativo, una autoridad someta ante un órgano jurisdiccional competente, el estudio de una resolución favorable a un particular, emitida erróneamente por éste, con el objeto de que dicha resolución sea anulada o modificada **“juicio de lesividad”**.
- Que esta Sala deberá de declarar la improcedencia del recurso de reclamación hecho valer por la hoy actora, en virtud de que el juicio contencioso administrativo federal que pretende hacer valer en contra de una resolución pronunciada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, no es la vía jurisdiccional correcta para que la Procuraduría Federal de la República, impugne las resoluciones administrativas emitidas por otra entidad, sino que tal y como lo ordena el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, el medio para impugnar dichas resoluciones lo constituye el juicio de amparo indirecto.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

9

Los suscritos Magistrados consideran **INFUNDADOS** los argumentos expresados por la recurrente de conformidad con lo siguiente:

En principio es necesario precisar que el presente recurso de reclamación fue interpuesto en contra del proveído de fecha 13 de enero de 2011, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de nulidad intentada por la Procuraduría General de la República al no encuadrar la resolución de la cual se reclama su nulidad en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Así pues, este Cuerpo Colegiado considera oportuno atender al contenido de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 51 y 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales son del tenor literal siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO 73. EL CONGRESO TIENE FACULTAD:

[...]

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena

autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Artículo 49. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 51. El recurso previsto en los artículos 49 y 50 procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 59. Las resoluciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la



existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras

públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

Párrafo reformado DOF 10-12-2010



XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y
Fracción adicionada DOF 10-12-2010

XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.
Fracción recorrida DOF 10-12-2010

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controveja con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controveja en unión del primer acto de aplicación.

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.

De los artículos transcritos con antelación podemos advertir las siguientes consideraciones:

- a. Que el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir leyes que instruyan a los Tribunales Contenciosos Administrativos, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir **controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares**.
- b. Que todo aquel solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto.
- c. Que el recurso previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- d. Que las resoluciones emitidas por Instituto Federal de Acceso a la Información Pública serán definitivas para las dependencias y entidades, y los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.
- e. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, previstos en el artículo 14 de su Ley Orgánica.
- f. Que las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

**ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA**

15

Ahora bien, esta Juzgadora considera pertinente precisar que la garantía de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona tiene derecho, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes aplicables, de comparecer ante Tribunales independientes que administren justicia y en su caso, para que se ejecute la resolución correspondiente, por lo que los integrantes del poder público tienen prohibido, en acatamiento a dicha garantía, obstaculizar el acceso a los mencionados tribunales, o bien, obstaculizar su función.

En congruencia con lo anterior, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, transrito en líneas que anteceden, otorga competencia a este Tribunal para conocer en el juicio contencioso administrativo de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades administrativas o fiscales, a efecto de que revise la legalidad de aquéllas resoluciones que sean emitidas en un procedimiento seguido ante autoridad administrativa, sin perjuicio de que éste se encuentre regulado en una Ley diversa a aquella en que se fundamenta la resolución emitida por dicha autoridad.

De esta manera, tenemos que **el juicio de nulidad puede ser promovido por los particulares** cuando exista una afectación a su esfera jurídica, sin embargo **el mismo no es procedente en contra de controversias que se susciten entre autoridades**, como en el presente caso lo es la Procuraduría General de la República en contra de una resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pues entre estas dos dependencias existe una relación de coordinación, al tratarse de entes de igual status.

En virtud de lo anterior, y en atención al principio general de derecho que establece que *los particulares pueden realizar todo lo que la ley no les prohíba, mientras que las autoridades únicamente pueden realizar lo que la ley expresamente les permite*, este Órgano Jurisdiccional no es competente para conocer de las controversias que se pudieran suscitar entre dos entes públicos, pues resultaría total y absolutamente contrario a su naturaleza jurídica, misma que se encuentra contemplada en el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto legal que faculta a los Tribunales Contenciosos Administrativos para resolver conflictos que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

17

Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

“No. Registro: 40,969
Jurisprudencia
Época: Quinta
Instancia: Pleno
Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 70.
Octubre 2006.
Tesis: V-J-SS-115
Página: 53

CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, COMO AUTORIDADES, CONTRA ACTOS DE OTRA AUTORIDAD.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLAS.- De conformidad a lo dispuesto por la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal, la competencia atribuida a los tribunales de lo contencioso administrativos, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se refiere sólo a las controversias que se suscitan entre los particulares y la Administración Pública Federal; en consecuencia, si un organismo público federal, en su carácter de autoridad, plantea una controversia en contra de una resolución de otra autoridad federal porque anuló una determinación emitida por ella; el Tribunal no es competente para conocer de dicha impugnación, toda vez que se trata de un conflicto entre autoridades y no se da el supuesto competencial del órgano de justicia, ya que el Organismo Público que plantea la demanda emitió el acto anulado actuando como autoridad integrante de la Administración Pública Federal, y no como particular. (3)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/46/2006)

PRECEDENTES:

V-P-SS-694

Juicio No. 10580/02-17-10-8/883/03-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de noviembre de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2005)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005.
p. 53

V-P-SS-695

Juicio No. 12957/02-17-10-7/414/03-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de noviembre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2005)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005.
p. 53

V-P-SS-696

Juicio No. 18095/02-17-09-3/146/04-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de marzo de 2005, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Alma Gianina Isabel Peralta De Gregorio.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril 2005)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005.
p. 53

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día diez de marzo de dos mil seis, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe."

(Énfasis de la Sala)

Ahora bien, no es óbice a la anterior conclusión la manifestación vertida por la recurrente en el sentido de que el Magistrado Instructor debió acatar lo dispuesto en el artículo 2º de la



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

19

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con artículo 14, fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues a través del presente juicio de nulidad, la Procuraduría General de la República controvierte una resolución que resultó favorable a un particular.

Lo anterior es así, toda vez que del artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que las autoridades podrán promover juicio de nulidad para el efecto de que en caso de ser procedente se anulen las resoluciones administrativas favorables a un particular (juicio de lesividad), sin embargo la interposición de dicho medio de defensa sólo es posible por la autoridad emisora de la resolución impugnada y no por una diversa autoridad.

Así pues, si el juicio de lesividad se promueve por una autoridad que no fue la emisora de la resolución impugnada, resulta improcedente dicho juicio por carecer de legitimación activa, toda vez que se presenta la demanda por quien no tiene la titularidad del derecho que se cuestiona.

Lo anterior aunado a que como ya se mencionó con antelación el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo conocerá de aquellas controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública Federal, no en contra de controversias que se susciten entre autoridades.

Sirven de apoyo a lo anterior la siguiente tesis y jurisprudencia:

No. Registro: 39,284

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 47.

Noviembre 2004.

Tesis: V-P-SS-592

Página: 106

IVA

JUICIO DE LESIVIDAD. SU IMPROCEDENCIA CUANDO SE PROMUEVE POR AUTORIDAD QUE NO EMITIÓ LA

RESOLUCIÓN FAVORABLE IMPUGNADA NI ES EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENEZCA LA AUTORIDAD

DEMANDANTE.- El artículo 11, antepenúltimo párrafo de

la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que dicho Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones del artículo mencionado, como de su competencia. Del contenido de dicho artículo se desprende que en el mismo se contiene la competencia para conocer de los juicios de lesividad a fin de que las autoridades administrativas puedan solicitar la anulación de las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en la fracciones del artículo 11, aludido, como de su competencia. Lo anterior, en virtud de que el acto administrativo no puede ser revocado por la autoridad que lo emitió cuando el mismo constituye una resolución



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

21

favorable a un particular, situación en la cual únicamente podrá solicitarse su anulación o modificación vía juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, esto es mediante el denominado por la doctrina, como "juicio de lesividad", lo que se traduce en que la interposición de dicho juicio sólo es posible por la autoridad emisora de la resolución impugnada o la dependencia a la que pertenezca y no por una diversa autoridad. En consecuencia, si un juicio de lesividad se promueve por una autoridad que no fue la emisora de la resolución impugnada, ni la dependencia a la que pertenezca, resulta improcedente dicho juicio por carecer de legitimación activa en juicio, porque se presenta la demanda por quien no tiene la titularidad del derecho que se cuestiona, y por ello, no es la idónea para estimular la función jurisdiccional, actualizándose las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones I y XIV, de artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, y el sobreseimiento de dicho juicio de lesividad conforme al artículo 203, fracción II del mismo Ordenamiento legal.
(10)

Juicio No. 6903/01-17-04-9/ac2/481/03-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de junio de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2004)

No. Registro: 40,969

Jurisprudencia

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 70. Octubre 2006.

Tesis: V-J-SS-115

Página: 53

IVA

CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, COMO AUTORIDADES, CONTRA ACTOS DE OTRA AUTORIDAD.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO TIENE COMPETENCIA PARA

CONOCER DE ELLAS.- De conformidad a lo dispuesto por la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal, la competencia atribuida a los tribunales de lo contencioso administrativos, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se refiere sólo a las controversias que se suscitan entre los particulares y la Administración Pública Federal; en consecuencia, si un organismo público federal, en su carácter de autoridad, plantea una controversia en contra de una resolución de otra autoridad federal porque anuló una determinación emitida por ella; el Tribunal no es competente para conocer de dicha impugnación, toda vez que se trata de un conflicto entre autoridades y no se da el supuesto competencial del órgano de justicia, ya que el Organismo Público que plantea la demanda emitió el acto anulado actuando como autoridad integrante de la Administración Pública Federal, y no como particular. (3)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/46/2006)

PRECEDENTES:

V-P-SS-694

Juicio No. 10580/02-17-10-8/883/03-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de noviembre de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2005)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005. p. 53

V-P-SS-695

Juicio No. 12957/02-17-10-7/414/03-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de noviembre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2005)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005. p. 53

V-P-SS-696

Juicio No. 18095/02-17-09-3/146/04-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de marzo de 2005, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Alma Gianina Isabel Peralta De Gregorio.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril 2005)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

23

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005. p. 53

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día diez de marzo de dos mil seis, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación vertida por la actora en el sentido de que le es aplicable al caso la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que la Procuraduría General de la República es un organismo de la Administración Pública Federal, y en consecuencia este Tribunal es competente para conocer de resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas que resulte de un procedimiento, una instancia o un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento administrativo, específicamente en términos del artículo 83 de dicha ley, tal manifestación resulta infundada.

Ello es así, toda vez que si bien le asiste la razón a la accionante en cuanto a que forma parte de la administración pública federal, y por tanto, le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo cierto es que del artículo 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podemos advertir que el recurso de revisión previsto en los artículos 49 y

50 de la citada ley, procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así pues, y atendiendo al principio de derecho que establece que *la Ley especial deroga a la Ley general*, el citado artículo 51, excluye la vía jurisdiccional prevista en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, luego entonces, podemos advertir que se trata de un medio de defensa distinto al previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dada la propia naturaleza especial que reviste la materia que rige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en la fracción XI, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este Órgano Jurisdiccional no es competente para conocer de la presente controversia, al no ser la resolución impugnada emitida en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LAS
RESOLUCIONES RECAÍDAS AL RECURSO DE REVISIÓN
PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.**

El artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se



promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En tales condiciones, es evidente que no se actualiza la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para conocer de las resoluciones dictadas e el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que el recurso de revisión previsto en el artículo 40 de este ordenamiento, procede en términos del 51 del mismo, en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que se advierte que la propia norma, de carácter general y obligatoria, libera al particular de recurrir dichas determinaciones conforme al recurso genérico previsto en la referida Ley de Procedimiento Administrativo; lo cual se confirma con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que señala que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública serán definitivas para las dependencias y entidades, agregando que los particulares, sin distinguir si éstos son los solicitantes de la información o un tercero, podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación, lo que debe de interpretarse en el sentido de que la intención de la creación de la ley en relación con la tramitación de solicitudes de información que requieren los particulares, fue la de evitar que el particular transitara por innumerables oficinas administrativas y con ello los procedimientos gravosos que dilaten aún más la obtención de información solicitada en los casos en que sea procedente. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo Directo 8/2007. Gas Natural de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. 29 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente Rolando González Licona. Secretaria: Ana Luisa Muñoz Rojas.

Lo anterior, máxime a que del artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se desprende que las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de

Acceso a la Información Pública, serán definitivas para las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por último, en cuanto a la manifestación de la recurrente en el sentido de que se debieron de tomar en consideración diversos precedentes emitidos por la Décima Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, dicha manifestación resulta infundada porque de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley de Amparo se desprende que este Órgano Colegiado sólo está obligado a aplicar las jurisprudencias de la Sala Superior de este Tribunal, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.

En ese orden de ideas, tenemos que en la especie el juicio de nulidad intentado en contra de la resolución indicada en el resultado primero, resulta notoriamente improcedente al no encuadrar en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, teniendo como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 8, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que es del tenor literal siguiente:



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

EXPEDIENTE: 964/11-17-06-2

ACTOR: PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

27

"ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

[...]

II. Que no le competía conocer a dicho Tribunal.

[...]

La procedencia del juicio será examinada aun de oficio."

Énfasis añadido

En consecuencia, ante lo expuesto resulta del todo **infundado** el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora por tanto, al no desvirtuarse la legalidad de la actuación del Magistrado Instructor, se confirma el acuerdo de fecha **11 de enero de 2011** en el que se desechó por improcedente la demanda de nulidad, en todas y cada una de sus partes.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- RESULTÓ PROCEDENTE PERO INFUNDADO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, EN CONSECUENCIA;

II.- SE CONFIRMA EL AUTO DE 11 DE ENERO DE 2011 EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.

**II.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA
Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.**

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran esta Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes actúan con la asistencia de la C. Secretaría de Acuerdos, que da fe.

OVC*pcb

*“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento a dicha Ley, fue suprimido de esta versión pública el **nombre de un tercero**, información considerada legalmente como **confidencial**, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos”.*